

INE/CG781/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020
DENUNCIANTES: ALEJANDRA CORIA CARRANGO Y
OTROS
DENUNCIADO: MOVIMIENTO CIUDADANO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR DIVERSOS CIUDADANOS EN CONTRA DE MOVIMIENTO CIUDADANO POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA PROBABLE VULNERACIÓN A SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE SUS DATOS PERSONALES PARA TAL FIN

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

G L O S A R I O	
LGPP	Ley General de Partidos Políticos
LGSMIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
MC	Movimiento Ciudadano
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral

A N T E C E D E N T E S

I. ACUERDO INE/CG33/2019.¹ El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue aprobado en sesión extraordinaria del *Consejo General*, el acuerdo por el cual se implementó, de manera excepcional, un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En este sentido, en el Punto de Acuerdo TERCERO del citado Acuerdo, se determinó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. **En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.**

¹Consultable en la liga de internet <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/CG1ex201901-23-ap-14.pdf>

[Énfasis añadido]

II. DENUNCIAS. En las fechas que a continuación se citan, se recibieron en la *UTCE* **13 escritos** de queja signados por diversos ciudadanos mediante los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, de manera individual, hechos que contravienen la normatividad electoral, consistentes en la presunta violación de su derecho de libertad de afiliación atribuida al *MC* y la indebida utilización de sus datos personales para tal fin.

NO.	NOMBRE DEL QUEJOSO	ENTIDAD FEDERATIVA	FECHA DE RECEPCIÓN
1	Alejandra Coria Carrango ²	Michoacán	10/11/2020
2	Sheila Sthefany Bibiano Molina ³	Guerrero	10/11/2020
3	Francisco Hernández González ⁴	Guerrero	10/11/2020
4	José Roberto García Montero ⁵	Chiapas	10/11/2020
5	Ma. del Rosario Martínez Rico ⁶	Baja California	10/11/2020
6	Araceli Domínguez Peralta ⁷	Hidalgo	10/11/2020
7	Javier Ramos Cañedo ⁸	Puebla	09/11/2020
8	Luis Miguel González ⁹	Puebla	09/11/2020
9	Elizabeth Vázquez Margarito ¹⁰	San Luis Potosí	06/11/2020
10	Alejandra Jiménez Castillo ¹¹	Puebla	06/11/2020
11	Manuel José Rivera Ríos ¹²	Guerrero	06/11/2020
12	MaxYair Flores Azamar ¹³	Oaxaca	06/11/2020
13	Ricardo Antonio Maldonado Rincón ¹⁴	Aguascalientes	10/11/2020

III. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y SOLICITUD DE BAJA COMO MILITANTES DE LOS DENUNCIANTES.¹⁵ Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidas las denuncias quedando registradas como

² Visible a fojas 4 a 10 del expediente.

³ Visible a fojas 13 a 17 del expediente.

⁴ Visible a fojas 18 a 22 del expediente.

⁵ Visible a fojas 25 a 33 del expediente.

⁶ Visible a fojas 40 a 43 del expediente.

⁷ Visible a foja 46 a 50 del expediente.

⁸ Visible a fojas 53 a 56 del expediente.

⁹ Visible a fojas 57 a 60 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 65 a 73 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 75 a 80 del expediente.

¹² Visible a fojas 83 a 92 del expediente.

¹³ Visible a fojas 95 a 98 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 262 a 268 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 99 a 110 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave **UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020**.

Respecto de Ricardo Antonio Maldonado Rincón [ciudadano que se encuentra en el numeral **13** de la tabla que antecede], toda vez que su queja había sido remitida únicamente en fotocopia, se determinó requerir a los Vocales Ejecutivo y Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Aguascalientes, a efecto de que remitieran el original del escrito de denuncia.

Asimismo, respecto de los ciudadanos que se encuentran en los numerales **1 al 12** de la tabla que antecede se admitió a trámite la denuncia, y se reservó lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se requirió al *MC* y a la *DEPPP* para que proporcionaran información relacionada con la presunta afiliación de las personas denunciantes.

Dicho proveído fue notificado y desahogado como se muestra a continuación:

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
<i>MC</i>	INE- UT/04334/2020 ¹⁶ 02/12/2020	Oficios MC-INE-227/2020 ¹⁷ 07/12/2020 MC-INE-237/2020 ¹⁸ 17/12/2020
<i>DEPPP</i>	Correo electrónico 01/12/2020 ¹⁹	Correo electrónico ²⁰ 26/01/2021
03 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Aguascalientes	Correo electrónico 01/12/2020 ²¹	Oficio INE/JDE03/AGS/VS/539/2020 04/12/2020 ²²

Finalmente, se ordenó a *MC* que en acatamiento a la obligación que le impone el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, así como a lo ordenado en el Acuerdo **INE/CG33/2019**, de manera inmediata, procediera a eliminar a los denunciantes de su padrón de militantes, en el caso de que aún se encontraran inscritos, tanto del

¹⁶ Visible a foja 136 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 155 a 169 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 198 a 211 del expediente.

¹⁹ Visible a foja 135 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 237 y 238 del expediente.

²¹ Visible a fojas 133 y 134 del expediente.

²² Visible a foja 145 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la DEPPP, como de su portal de internet y/o cualquier otra base publica en que pudieran encontrarse.

IV. VISTA A LAS PERSONAS DENUNCIANTES.²³ Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las personas denunciantes con las cédulas aportadas por MC.

Dicha diligencia se realizó de la siguiente forma:

NO.	Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Alejandra Coria Carrango INE/JD-12/MICH/VS/124/2021 ²⁴	Notificación: 22/02/2021 Plazo: 23 al 25 de febrero de 2021	Sin respuesta
2	Sheila Sthefany Bibiano Molina INE/GRO/JD09/002/2020 ²⁵	Cédula: 16/02/2021 Plazo: 17 al 19 de febrero de 2021	Escrito 17/02/2021 ²⁶
3	Francisco Hernández González INE/GRO/JD09/0083/2020 ²⁷	Cédula: 15/02/2021 Plazo: 16 al 18 de febrero de 2021	Escrito 17/02/2021 ²⁸
4	José Roberto García Montero Sin oficio ²⁹	Cédula: 10/02/2021 Plazo: 11 al 15 de febrero de 2021	Sin respuesta
5	Ma. del Rosario Martínez Rico INE/BC/JD08/VS/172/2021 ³⁰	Cédula: 10/02/2021 Plazo: 11 al 15 de febrero de 2021	Sin respuesta
6	Araceli Domínguez Peralta INE/05JDE/VE/065/2021 ³¹	Cédula: 10/02/2021 Plazo: 11 al 15 de febrero de 2021	Escrito 12/02/2021 ³²
7	Javier Ramos Cañedo INE/06JDE/VE/0154/2021 ³³	Estrados: 11/02/2021 Plazo: 12 al 16 de febrero de 2021	Sin respuesta
8	Luis Miguel González INE/06JDE/VE/0155/2021 ³⁴	Cédula: 11/02/2021 Plazo: 12 al 16 de febrero de 2021	Sin respuesta

²³ Visible a fojas 251 a 260 del expediente.

²⁴ Visible a fojas 423 a 425 del expediente.

²⁵ Visible a foja 445 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 437 a 439 del expediente.

²⁷ Visible a foja 442 del expediente.

²⁸ Visible a fojas 440 y 441 del expediente.

²⁹ Visible a foja 367 del expediente.

³⁰ Visible a foja 332 del expediente.

³¹ Visible a foja 471 del expediente.

³² Visible a fojas 462 a 469 del expediente.

³³ Visible a foja 384 del expediente.

³⁴ Visible a foja 381 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

NO.	Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
9	Elizabeth Vázquez Margarito INE/SLP/07JDE/VS/059/2021 ³⁵	Cédula: 11/02/2021 Plazo: 12 al 16 de febrero de 2021	Escrito 13/02/2021 ³⁶
10	Alejandra Jiménez Castillo INE/JDE13/VSD/0199/2021 ³⁷	Cédula: 10/02/2021 Plazo: 11 al 15 de febrero de 2021	Escrito 12/02/2021 ³⁸
11	Manuel José Rivera Ríos INE/JDE-02/VS/139/2021 ³⁹	Cédula: 12/02/2021 Plazo: 15 al 17 de febrero de 2021	Correo 16/02/2021 Escrito 05/03/2021 ⁴⁰
12	MaxYair Flores Azamar INE/OAX/JD01/VS/0076/2021 ⁴¹	Cédula: 11/02/2021 Plazo: 12 al 16 de febrero de 2021	Sin respuesta

Aunado a lo anterior, se determinó remitir al expediente UT/SCG/Q/FGG/JD21/CDM/177/2020, las constancias relativas al ciudadano Ricardo Antonio Maldonado Rincón, toda vez su escrito original de queja se encontraba instruyéndose en dicho procedimiento ordinario sancionador.

V. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.⁴² Mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se ordenó la instrumentación de acta circunstanciada a efecto de verificar la baja de los quejosos del padrón de afiliados del MC.

Como resultado de dicha verificación se advirtió que, al introducir los datos de las personas denunciantes en el padrón de militantes del partido político de referencia, no se encontró coincidencia con los datos de los mismos.

No obstante, se detectó que existía un registro a nombre de Francisco Hernández González, cuyos datos no eran coincidentes con la entidad a la que pertenece el quejoso materia del presente procedimiento.

Aunado a lo anterior, se ordenó reponer la notificación realizada al ciudadano MaxYair Flores Azamar, toda vez que no se le corrió traslado con la cédula aportada por el denunciado.

³⁵ Visible a foja 351 del expediente.

³⁶ Visible a fojas 374 a 376 del expediente.

³⁷ Visible a foja 378 del expediente.

³⁸ Visible a fojas 320 y 321 del expediente

³⁹ Visible a foja 451 del expediente.

⁴⁰ Visible a fojas 455 a 461 del expediente.

⁴¹ Visible a foja 345 del expediente.

⁴² Visible a fojas 474 a 481 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

Dicha diligencia se realizó de la siguiente forma:

NO.	Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	MaxYair Flores Azamar INE/OAX/JD01/VS/0235/2021 ⁴³	Cédula: 05/07/2021 Plazo: 6 al 8 de julio de 2021	Sin respuesta

Finalmente, se solicitó a la *DERFE* que informara si *MC* llevó a cabo el registro de Max Yair Flores Azamar y Alejandra Coria Carrango como militantes de su partido mediante la aplicación móvil denominada “apoyo ciudadano-INE” y, en su caso remitiera los expedientes electrónicos respectivos.

Dicha diligencia se desahogó conforme a lo siguiente:

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
<i>DERFE</i>	Correo electrónico 01/07/2021 ⁴⁴	Oficio. INE/DERFE/STN/12801/2021 ⁴⁵ 02/08/2021

VI. REQUERIMIENTO A *MC*.⁴⁶ A efecto de verificar que no se tratara del ciudadano que forma parte del presente procedimiento, mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se ordenó requerir al instituto político denunciado que informara si el ciudadano Francisco Hernández González, que aparece en el padrón de afiliados de dicho partido, corresponde al quejoso materia del presente procedimiento o si se trataba de una homonimia.

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
<i>MC</i>	INE-UT/00413/2021 27/01/2022 ⁴⁷	Oficio MC-INE-044/2022 27/01/2022 ⁴⁸

VII. REQUERIMIENTO A LA *DEPPP*⁴⁹. Mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós se requirió a la *DEPPP*, para que verificara si el ciudadano Francisco Hernández González, que aparece en el padrón de militantes de *MC* es homónimo del ciudadano materia del presente procedimiento.

⁴³ Visible a foja 373 del expediente.

⁴⁴ Visible a foja 503 del expediente.

⁴⁵ Visible a fojas 516 a 521 del expediente.

⁴⁶ Visible a páginas 527 a 531 del expediente.

⁴⁷ Visible a foja 533 del expediente.

⁴⁸ Visible a fojas 536 a 539 del expediente.

⁴⁹ Visible a fojas 542 a 546 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

Sujeto requerido	Oficio/Correo	Fecha de Respuesta
DEPPP	SAI 06/04/2022 ⁵⁰	Correo electrónico. 05/04/2022 ⁵¹

VIII. VISTA A FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.⁵² Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a Francisco González Hernández, corriéndole traslado con el anexo de la respuesta proporcionada por la DEPPP, a efecto de informarle que existen dos homonimias con su nombre en el padrón de afiliados de MC.

IX. EMPLAZAMIENTO Y NOTIFICACIÓN A DIVERSOS FUNCIONARIOS.⁵³ Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a MC, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, proveído que fue notificado conforme a lo siguiente:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
MC INE-UT/06058/2022 ⁵⁴	Citatorio: 28/06/2022 Cédula: 29/06/2022 Plazo: 30 de junio al 6 de julio de 2022	MC-INE-238/2022 ⁵⁵ 01/07/2022

Aunado a lo anterior, en atención a lo señalado en el Anexo 5 del *Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, para el Proceso Electoral 2020-2021* se ordenó notificar al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica de este instituto, así como a los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Distritales Ejecutivas de este instituto correspondientes, respecto del desahogo u omisión de la vista formulada a las y los quejosos.

X. ALEGATOS⁵⁶. El veintiuno de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

⁵⁰ Visible a fojas 548 a 557 del expediente.

⁵¹ Visible a fojas 558 a 559 del expediente.

⁵² Visible a fojas 561 a 565 del expediente.

⁵³ Visible a fojas 578 a 588 del expediente.

⁵⁴ Visible a foja 601 del expediente.

⁵⁵ Visible a fojas 608 a 616 del expediente.

⁵⁶ Visible a fojas 618 a 623 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

Dicha diligencia se realizó de la siguiente manera:

Denunciantes

NO.	Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Alejandra Coria Carrango INE/JD-12/MICH/VS/485/2022 ⁵⁷	Notificación: 17/08/2022 Plazo: 18 al 24 de agosto de 2022	Sin respuesta
2	Sheila Sthefany Bibiano Molina INE/GRO/JD09/0574/2022 ⁵⁸	Cédula: 12/08/2022 Plazo: 15 al 19 de agosto de 2022	Sin respuesta
3	Francisco Hernández González INE/GRO/JD09/0573/2022 ⁵⁹	Cédula: 11/08/2022 Plazo: 12 al 18 de agosto de 2022	Sin respuesta
4	José Roberto García Montero INE/CHIS/10JDE/VS/379/2022 ⁶⁰	Cédula: 11/08/2022 Plazo: 12 al 18 de agosto de 2022	Sin respuesta
5	Ma. del Rosario Martínez Rico INE/BC/JD08/VS/777/2022 ⁶¹	Estrados: 10/08/2022 Plazo: 11 al 17 de agosto de 2022	Sin respuesta
6	Araceli Domínguez Peralta INE/05JDE/VE/388/2022 ⁶²	Cédula: 11/08/2022 Plazo: 12 al 18 de agosto de 2022	Sin respuesta
7	Javier Ramos Cañedo INE/06JDE/VSD/850/2022 ⁶³	Estrados: 10/08/2022 Plazo: 11 al 17 de agosto de 2022	Sin respuesta
8	Luis Miguel González INE/06JDE/VSD/851/2022 ⁶⁴	Cédula: 12/08/2022 Plazo: 15 al 19 de agosto de 2022	Sin respuesta
9	Elizabeth Vázquez Margarito INE/SLP/07JDE/VS/179/2022 ⁶⁵	Citatorio: 10/08/2022 Cédula: 11/08/2022 Plazo: 12 al 18 de agosto de 2022	Sin respuesta
10	Alejandra Jiménez Castillo INE/JDE13/VSD/1040/2022 ⁶⁶	Cédula: 11/08/2022 Plazo:	Sin respuesta

⁵⁷ Visible a fojas 723 y 724 del expediente.

⁵⁸ Visible a foja 691 del expediente.

⁵⁹ Visible a fojas 694 del expediente.

⁶⁰ Visible a foja 719 del expediente.

⁶¹ Visible a fojas 682 a 684 del expediente.

⁶² Visible a fojas 733 del expediente.

⁶³ Visible a foja 703 del expediente.

⁶⁴ Visible a fojas 710 del expediente.

⁶⁵ Visible a foja 668 del expediente.

⁶⁶ Visible a foja 654 y 686 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

NO.	Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
11	Manuel José Rivera Ríos INE/JDE-02/VS/0534/2022 ⁶⁷	Cédula: 29/08/2022 Plazo: 30 de agosto al 5 de septiembre de 2022	Sin respuesta
12	MaxYair Flores Azamar INE/OAX/JD01/VE/410/2022 ⁶⁸	Cédula: 11/08/2022 Plazo: 12 al 18 de agosto de 2022	Sin respuesta

Denunciado

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
MC INE-UT/06964/2022 ⁶⁹	Citatorio: 10/08/2022 Cédula: 11/08/2022 Plazo:	MC-INE-265/2022 ⁷⁰ 15/08/2022

XI. ESCISIÓN. Mediante diverso proveído, la *UTCE*, en el ámbito de sus atribuciones ordenó escindir los escritos de queja y documentación relativa a las ciudadanas **Elizabeth Vázquez Margarito, Araceli Domínguez Peralta**, así como del ciudadano **Manuel José Rivera Ríos**.

XII. VERIFICACIÓN FINAL DE NO REAFILIACIÓN. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, personal de la *UTCE*, ingresó al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos de la *DEPPP*, logrando advertir que la totalidad de personas denunciantes, siguen apareciendo con registro de militancia cancelado, sin que hubiera alguna nueva afiliación.

XIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente para someterlo a la consideración de la Comisión de Quejas.

XIV. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el veintitrés de noviembre de este año, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto en lo general, por unanimidad de votos de sus integrantes, y parcialmente el resolutivo SEGUNDO, respecto a **Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González y Alejandra Jiménez Castillo** con el voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y con el voto a favor

⁶⁷ Visible a foja 756 del expediente.

⁶⁸ Visible a foja 714 del expediente.

⁶⁹ Visible a foja 646 del expediente.

⁷⁰ Visible a fojas 670 a 673 del expediente.

de la Consejera Electoral Maestra Claudia Beatriz Zavala Pérez y el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de los datos personales, por parte de *MC*, en perjuicio de las personas quejasas que han sido señaladas a lo largo de la presente determinación.

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de estos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n); y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas a *MC*, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político de los ciudadanos referidos previamente.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,⁷¹ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por transgresión a la ley.
- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por transgresión a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a) y n); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir, con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

⁷¹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO.

Para la resolución del presente asunto se debe subrayar que, para los casos de Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González, José Roberto García Montero y Ma. del Rosario Martínez Rico, la presunta violación a su derecho de libre afiliación se cometió durante la vigencia del *COFIPE*, pues el registro o afiliación de dichas personas denunciantes al referido instituto político, de acuerdo a lo informado por la *DEPPP*, se realizó el:

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación
1	Sheila Sthefany Bibiano Molina	27/02/2012
2	Francisco Hernández González	07/06/2012
3	José Roberto García Montero	01/07/2013
4	Ma. del Rosario Martínez Rico	23/11/2011

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en dicho caso, al margen que la falta pudiera haber sido advertida por los denunciantes mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*.

Ahora bien, para el caso de Alejandra Coria Carrango, Javier Ramos Cañedo, Luis Miguel González, Alejandra Jiménez Castillo y MaxYair Flores Azamar ciudadanos que, de conformidad con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Político de este Instituto, fueron afiliados con posterioridad a la entrada en vigor de la *LGIPE*, como se advierte a continuación:

	Persona denunciante	Fecha de afiliación
1	Alejandra Coria Carrango	29/02/2020
2	Javier Ramos Cañedo	30/10/2019
3	Luis Miguel González	23/10/2019
4	Alejandra Jiménez Castillo	06/11/2019
5	MaxYair Flores Azamar	04/11/2019

Para dichos casos será aplicable la referida *LGIPE*, finalmente, será la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas* la normativa aplicable para cuestiones procesales y/o adjetivas.

TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019.

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- 1) La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política fue insuficiente para inhibir esta conducta.
- 2) Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliados, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- 3) La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar su número mínimo de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.
- 4) Dicha verificación no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encontraran inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hubieran solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se contara con alguno de los documentos que avalaran su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontraran en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que, durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de sus portales de internet y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de 9 millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliadas y afiliados son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este *Consejo General* al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera

particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Dentro de la etapa de emplazamiento y durante la etapa de alegatos *MC*, por conducto de su representante ante el *Consejo General*, manifestó, lo siguiente:

1. *MC* ha mantenido un interés profundo por el respeto no solo por las instituciones y el marco jurídico por el cual rigen sus actividades, sino también por el pleno respecto a los derechos político-electorales de la ciudadanía, entre ellos el derecho de asociación política y la libertad de afiliación.
2. Los ciudadanos que manifiesten su deseo de querer afiliarse a *MC* por compartir su ideología y principios democráticos deben hacerlo como un acto voluntario y como actos de buena fe por parte del partido al confiar plenamente en los datos y firma que asienta el ciudadano en su respectiva cédula de afiliación.
3. Si bien los ciudadanos denunciantes exponen la supuesta afiliación sin su consentimiento, así como el uso indebido de datos personales, se demostró con las documentales comprobatorias que se afiliaron por propia voluntad.
4. *MC* realizó la baja de cada uno de ellos del padrón de militantes.
5. Una vez que se realice un estudio de las constancias que obran en el expediente, se podrá desprender que *MC* ha cumplido con lo que mandara el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la *LGPP*.
6. Refiere que la tesis de rubro *HAN SOSTENIDO, QUE LA FALSIFICACIÓN DE UNA FIRMA-DE UN DOCUMENTO PRIVADO- SÓLO PUEDE SER DETERMINADA POR UN PERITO GRAFÓSCOPO*, no es aplicable en el presente asunto ya que los quejosos no solicitaron dicho dictamen, por tanto la

firma plasmada en las cédulas de afiliación es de los denunciantes, ya que no existe una valoración técnica que diga lo contrario.

7. La afiliación se realizó de manera correcta al contar con la cédula exigida recientemente por la autoridad electoral, lo que trae consigo que no se incurrió en una indebida afiliación.
8. Refiere que no pueden ser responsables de actos que son de buena fe como el llenado de las cédulas de afiliación.

Ahora bien, por cuestión de método y debido a que las excepciones y defensas guardan estrecha vinculación con el análisis necesario para dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto.

2.- FIJACIÓN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

La materia en el presente procedimiento se constriñe en determinar si *MC* transgredió el derecho de libertad de afiliación de **Alejandra Coria Carrango, Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González, José Roberto García Montero, Ma. del Rosario Martínez Rico, Javier Ramos Cañedo, Luis Miguel González, Alejandra Jiménez Castillo y MaxYair Flores Azamar**, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

3.- MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación

en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.⁷²

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,⁷³ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

⁷² Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

⁷³ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto

en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1.
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Que los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces

Instituto Federal Electoral por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.

- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliado, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de

estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con lo necesario para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cual, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna de MC

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna de MC, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:

ARTÍCULO 3

De la Participación Ciudadana.

1. Toda persona ciudadana en pleno goce de sus derechos políticos, puede solicitar su afiliación como militante, simpatizante o adherente de Movimiento Ciudadano, la cual deberá inscribirse en el Registro Nacional.

Las personas jóvenes mayores de 16 años podrán participar como militantes de Movimiento Ciudadano, y las personas menores de 16 años, pero mayores de 14, podrán solicitar su participación como simpatizantes o adherentes.

Las personas militantes aceptan y se comprometen a cumplir los Documentos Básicos de Movimiento Ciudadano, así como a participar activamente y realizar las tareas que se les asignen.

Las personas simpatizantes y adherentes se comprometen a respetar los Documentos Básicos y contribuir a alcanzar los objetivos de Movimiento Ciudadano mediante su apoyo económico, intelectual, del voto o de propaganda, de opinión o de promoción, en términos del reglamento respectivo.

Movimiento Ciudadano promoverá que sus simpatizantes y adherentes en igualdad de condiciones, puedan participar como personas integrantes de los órganos de dirección y a cargos de elección popular, en el nivel de que se trate, atendiendo a su capacidad de compromiso, visión ciudadana, representatividad y de todas aquellas capacidades que constituyan ánimo de reconocimiento, previa autorización de la Coordinadora Ciudadana Nacional.

2. La afiliación y la adhesión son individuales, personales, libres, pacíficas y voluntarias y se deben solicitar en la instancia de Movimiento Ciudadano más próxima al domicilio del interesado.

3. La actividad política, la gestión social y de promoción que realicen las personas dirigentes, afiliadas, simpatizantes y adherentes no constituyen por sí mismas relación laboral con Movimiento Ciudadano.

Las afiliaciones y adhesiones se notificarán al órgano superior, y así sucesivamente hasta llegar a la Comisión Permanente, para que se incluyan en el Registro Nacional. La Coordinadora Ciudadana Nacional se reserva el derecho de aprobar y acreditar las solicitudes en última instancia.

Los órganos de dirección y de control garantizan la protección de los datos personales de sus militantes, simpatizantes y adherentes, así como al acceso, rectificación, cancelación y oposición de éstos.

4. Para afiliarse a Movimiento Ciudadano se deberán suscribir los siguientes compromisos:

a) Aceptar y cumplir la Declaración de Principios, la Carta de Identidad, el Programa de Acción y los Estatutos de Movimiento Ciudadano.

b) Acatar como válidas las resoluciones que dicte Movimiento Ciudadano.

c) Participar activa, disciplinada y permanentemente en la realización de los objetivos de Movimiento Ciudadano y en las comisiones y tareas que se le asignen.

d) Contar con la credencial para votar vigente expedida por el Registro Federal de Electores y estar inscrito en el Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral.

e) Llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.

f) En los casos de las y los jóvenes menores de 18 años, éstos deberán presentar su Cédula Única de Registro de Población.

5. La credencial de militante expedida por la Comisión Operativa Nacional certifica la afiliación, el registro de aceptación y la inscripción regular de las personas militantes de Movimiento Ciudadano.

6. La Secretaría de Organización y Acción Política deberá mantener actualizado el padrón de personas afiliadas, simpatizantes y adherentes de Movimiento Ciudadano.

...

D) Acuerdo INE/CG33/2019

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del INE, al emitir el Acuerdo registrado con la clave INE/CG33/2019, por el cual se aprobó *“la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales”* ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

C O N S I D E R A N D O

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN, toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y

ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso**

de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

A C U E R D O

PRIMERO. *Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.*

SEGUNDO. *Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.*

TERCERO. *Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.*

CUARTO. *Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.*

QUINTO. *Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.*

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6º, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

...
los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer

...

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- A MC podrán afiliarse toda persona ciudadana en pleno goce de sus derechos políticos, para lo cual deberán inscribirse en el Registro Nacional.

- Lo órganos de dirección y control de *MC* garantizaran la protección de los datos personales de sus militantes, simpatizantes y adherentes, así como el acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- Para afiliarse a *MC* se deberá llenar la solicitud respectiva en donde se manifieste su propósito de afiliarse y conste su firma o huella digital.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto de la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avalen las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este Consejo General, emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

4. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO.

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando una persona pretenda, libre y voluntariamente, ser registrada como militante de un partido político, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la

información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrada en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso *MC*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que la o el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente SUP-RAP-107/2017,⁷⁴ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,⁷⁵ el cual tiene distintas vertientes, entre las

⁷⁴ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

⁷⁵ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria⁷⁶ y como estándar probatorio.⁷⁷

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁷⁸ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciados sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

⁷⁶ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

⁷⁷ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

⁷⁸ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA**, **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *LGSMIME*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la **constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que una persona desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la o del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento de la persona denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de

presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo una persona previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por la parte quejosa, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIFE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

- 1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*
- 2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*
- 3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**⁷⁹ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). *En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.*

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

⁷⁹ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**⁸⁰
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**⁸¹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**⁸²
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**⁸³
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**⁸⁴
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**⁸⁵

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,⁸⁶ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio*

⁸⁰ Jurisprudencia I.3Oc. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

⁸¹ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

⁸² Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

⁸³ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

⁸⁴ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

⁸⁵ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

⁸⁶ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,⁸⁷ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando **se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.**

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la persona, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que la parte quejosa realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, la persona denunciante afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos

⁸⁷ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

5. HECHOS ACREDITADOS.

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por **Alejandra Coria Carrango, Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González, José Roberto García Montero, Ma. del Rosario Martínez Rico, Javier Ramos Cañedo, Luis Miguel González, Alejandra Jiménez Castillo y MaxYair Flores Azamar** versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación al ser incorporados al padrón de *MC*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, es preciso señalar que, toda vez que *MC* informó que los datos para la afiliación de **Alejandra Coria Carrango y Max Yair Flores Azamar** se recabaron mediante el uso de la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE”, la *UTCE* solicitó a la *DERFE* que informara si esa Dirección contaba con los expedientes electrónicos de afiliación, y de ser el caso, remitiera los mismos.

En tal virtud, mediante oficio INE/DERFE/STN/12801/2021, la *DERFE* informó, en lo que interesa, lo siguiente:

...

Al respecto, hago de su conocimiento que, la Coordinación de Procesos Tecnológicos de esta Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, señaló que el pasado 03 de julio de 2019, el Instituto Nacional Electoral, suscribió con el Partido Movimiento Ciudadano, un Convenio de Apoyo y Colaboración y su correspondiente Anexo Técnico, a fin de fijar las bases de colaboración para que el Instituto pusiera a su disposición el uso de la Aplicación Móvil, para las afiliaciones, ratificaciones o refrendo de sus afiliados, mismos que obran en posesión del área normativa de esta Dirección Ejecutiva.

En virtud de lo anterior, el citado partido político utilizó la Aplicación Móvil para la afiliación, ratificación o refrendo de sus afiliados.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

Así mismo, con la finalidad de dar atención al requerimiento de mérito, le comento que, de conformidad con los Lineamientos que regulan el uso de la aplicación móvil que permite recabar los datos e integrar el expediente electrónico que acredite la voluntad de la ciudadanía para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional, aprobados mediante Acuerdo INE/CG231/2019, del Consejo General de este Instituto, en los cuales se define lo siguiente:

“ ...

p) Expediente electrónico: Conjunto de archivos captados por la aplicación móvil que acreditan la voluntad de la ciudadanía de afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a un Partido Político Nacional, el cual está conformado por las imágenes correspondientes al anverso y reverso de la Credencial para Votar original, fotografía viva de la o el ciudadano y la firma manuscrita digitalizada de la o el ciudadano.

...”

En ese sentido, derivado de la búsqueda realizada por esta Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de la Coordinación de Procesos Tecnológicos en el Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, a fin de identificar si la afiliación, ratificación o refrendo de los ciudadanos solicitados por esa Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fueron captados mediante el uso de la Aplicación Móvil “Apoyo Ciudadano-INE”, me permito comentarle que, se localizaron los 2 (dos) registros con los nombres de los ciudadanos proporcionados, en el Padrón de personas afiliadas al Partido Movimiento Ciudadano.

...

Precisado lo anterior, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en los cuadros siguientes se resumirá, por cada persona denunciante, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que fueron advertidas:

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
1	Alejandra Coria Carrango	Fecha de afiliación: 29/02/2020 Fecha de baja: 02/12/2020 Fecha de cancelación: 03/12/2020	El representante de MC manifestó, mediante los siguientes oficios que: MC-INE-227/2020 La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darla de baja.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
		<p>Información proporcionada por la DERFE</p> <p>Fecha de afiliación de la Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político: 29/02/2020</p>	<p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula del expediente electrónico de afiliación de fecha: 29/02/2020</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a *MC* sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. *MC* reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de *MC*, en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.
5. *MC* y la *DERFE* proporcionaron la *cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político* de la persona denunciante, en el que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y **firma manuscrita digitalizada** a través de la aplicación móvil.
6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la *cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político*, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar el expediente electrónico aportado.</p> <p>Se concluye que NO se trata de una afiliación indebida pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
2	Sheila Sthefany Bibiano Molina	<p>Fecha de afiliación: 27/02/2012</p> <p>Fecha de baja: 26/10/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 27/10/2020</p>	<p>El representante de MC manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado y su baja data del 26 de octubre, ya que la solicitó ante la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero.</p> <p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula de afiliación de fecha: 16 de febrero de 2012</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a MC sin su consentimiento.

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
<p>2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>3. MC reconoció a la persona denunciante como su militante.</p> <p>4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MC, en atención a lo informado por la DEPPP y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. MC proporcionó la cédula de afiliación con la firma de la persona denunciante.</p> <p>6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la cédula de afiliación, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa manifestó que desconoce la cédula.</p> <p>8. La quejosa no dio respuesta a la vista de alegatos.</p> <p>No obstante que la quejosa objetó la cédula de afiliación, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de la cédula aportada por el denunciado, por lo que se debe concluir que NO se trata de una afiliación indebida.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
3	Francisco Hernández González	<p>Fecha de afiliación: 07/06/2012</p> <p>Fecha de baja: 02/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>El representante de MC manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darlo de baja.</p> <p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula de afiliación de fecha: 22 de mayo de 2012</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a MC sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. MC reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MC, en atención a lo informado por la DEPPP y el propio instituto político denunciado.
5. MC proporcionó la cédula de afiliación con la firma de la persona denunciante.
6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la cédula de afiliación, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del

año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

7. El quejoso manifestó que desconoce la firma que se muestra.

8. El quejoso no dio respuesta a la vista de alegatos.

No obstante que el quejoso objetó la cédula de afiliación, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de la cédula aportada por el denunciado, por lo que se debe concluir que **NO se trata de una afiliación indebida.**

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
4	José Roberto García Montero	<p>Fecha de afiliación: 01/07/2013</p> <p>Fecha de baja: 02/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>El representante de MC manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darlo de baja.</p> <p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula de afiliación de fecha: 1 de julio de 2013.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a MC sin su consentimiento.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
<p>2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>3. MC reconoció a la persona denunciante como su militante.</p> <p>4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MC, en atención a lo informado por la DEPPP y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. MC proporcionó la cédula de afiliación con la firma de la persona denunciante.</p> <p>6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la cédula de afiliación, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar la cédula.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó la cédula de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
5	Ma. del Rosario Martínez Rico	<p>Fecha de afiliación: 23/11/2011</p> <p>Fecha de baja: 02/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>El representante de <i>MC</i> manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darla de baja.</p> <p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula de afiliación de fecha: 23 de noviembre de 2011</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a *MC* sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. *MC* reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de *MC*, en atención a lo informado por la DEPPP y el propio instituto político denunciado.
5. *MC* proporcionó la cédula de afiliación con la firma de la persona denunciante.
6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la cédula de afiliación, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa no realizó manifestación alguna para objetar la cédula.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó la cédula de afiliación y dicho documento no fue objetado por la quejosa.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
6	Javier Ramos Cañedo	<p>Fecha de afiliación: 30/10/2019</p> <p>Fecha de baja: 02/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>El representante de MC manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darlo de baja.</p> <p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula de afiliación de fecha: 30 de octubre de 2019.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a MC sin su consentimiento.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.</p> <p>3. MC reconoció a la persona denunciante como su militante.</p> <p>4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de MC, en atención a lo informado por la DEPPP y el propio instituto político denunciado.</p> <p>5. MC proporcionó la cédula de afiliación con la firma de la persona denunciante.</p> <p>6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la cédula de afiliación, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar la cédula.</p> <p>Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó la cédula de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
7	Luis Miguel González	<p>Fecha de afiliación: 23/10/2019</p> <p>Fecha de baja: 02/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>El representante de MC manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darlo de baja.</p> <p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			<p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula de afiliación de fecha: 23 de octubre de 2019.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a *MC* sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. *MC* reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de *MC*, en atención a lo informado por la DEPPP y el propio instituto político denunciado.
5. *MC* proporcionó la cédula de afiliación con la firma de la persona denunciante.
6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la cédula de afiliación, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.
7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar la cédula.

Se concluye que **NO se trata de una afiliación indebida** pues el denunciado aportó la cédula de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
8	Alejandra Jiménez Castillo	<p>Fecha de afiliación: 06/11/2019</p> <p>Fecha de baja: 02/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>El representante de <i>MC</i> manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darla de baja.</p> <p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula de afiliación de fecha: 06 de noviembre de 2019.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a *MC* sin su consentimiento.
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.
3. *MC* reconoció a la persona denunciante como su militante.
4. No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de *MC*, en atención a lo informado por la DEPPP y el propio instituto político denunciado.
5. *MC* proporcionó la cédula de afiliación con la firma de la persona denunciante.
6. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a la persona denunciante con la cédula de afiliación, que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
		<p>año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.</p> <p>7. La quejosa manifestó que desconoce la letra y firma.</p> <p>8. La quejosa no dio respuesta a la vista de alegatos.</p> <p>No obstante que la quejosa objetó la cédula de afiliación, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de la cédula aportada por el denunciado, por lo que se debe concluir que NO se trata de una afiliación indebida.</p>	

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
9	Max Yair Flores Azamar	Fecha de afiliación: 04/11/2019 Fecha de baja: 02/12/2020 Fecha de cancelación: 03/12/2020	<p>El representante de MC manifestó, mediante los siguientes oficios que:</p> <p style="text-align: center;">MC-INE-227/2020</p> <p>La persona denunciante sí fue militante de su representado, por lo tanto, se procedió a darlo de baja.</p>
		Información proporcionada por la DERFE	<p>Respecto a la cédula de afiliación informó que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, los empleados se encontraban trabajando desde sus casas, por lo que una vez que se pudiera asistir a las instalaciones se remitirían.</p>
		Fecha de afiliación de la Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político: 21/08/2019	<p style="text-align: center;">MC-INE-237/2020</p> <p>Remitió cédula del expediente electrónico de afiliación de fecha: 04/11/2019</p>

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. La persona quejosa manifestó que fue afiliada a <i>MC</i> sin su consentimiento.			
2. La DEPPP informó que la persona denunciante sí apareció en el padrón de afiliados del partido político.			
3. <i>MC</i> reconoció a la persona denunciante como su militante.			
4.No existe controversia de que la persona denunciante fue registrada como afiliada de <i>MC</i> , en atención a lo informado por la DEPPP, la DERFE y el propio instituto político denunciado.			
5. <i>MC</i> y la <i>DERFE</i> proporcionaron la <i>cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político</i> de la persona denunciante, en el que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y <u>firma manuscrita digitalizada</u> a través de la aplicación móvil.			
6. Mediante proveído de nueve de febrero y treinta de junio de dos mil veintiuno[reposición de notificación], se dio vista a la persona denunciante con la <i>cédula del expediente electrónico de afiliación, refrendo o ratificación de la ciudadanía como militante de un partido político</i> , que contiene sus datos y firma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso, se dio vista de alegatos a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.			
7. El quejoso no realizó manifestación alguna para objetar el expediente electrónico aportado.			
Se concluye que <u>NO se trata de una afiliación indebida</u> pues el denunciado aportó el respectivo expediente electrónico de afiliación y dicho documento no fue objetado por el quejoso.			

Las constancias aportadas por la *DEPPP* al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*,

mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por lo que hace a las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, así como por los denunciantes, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3, de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de la infracción aducida por las personas denunciantes, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde al promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *LGSMIME*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el diverso 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de la persona quejosa para afiliarla a su partido político, y no a la persona que negó haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

Por lo que, en el caso concreto, la carga de la prueba corresponde a *MC*, en tanto que el dicho de los denunciantes consiste en que no dieron su consentimiento para ser militantes de dicho instituto político, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por la *Sala Superior* al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro ***DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO***, en la que estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

Como quedó evidenciado, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* y el propio instituto político denunciado, que las y los quejosos se encontraron, en algún momento afiliados a *MC*.

En ese contexto, para determinar si *MC* incurrió o no en una posible infracción a la normativa electoral, el análisis correspondiente se dividirá en DOS apartados:

- 1. Apartado relativo a las personas denunciantes que no objetaron los formatos aportados por *MC***
- 2. Apartado relativo a las personas denunciantes que objetaron los formatos aportados por *MC***

1. Apartado relativo a las personas denunciantes que no objetaron los formatos aportados por *MC*

Como se precisó previamente, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

En el caso, como quedó establecido en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, la *DERFE* [en el caso de Alejandra Coria Carrango y MaxYair Flores Azamar] y *MC* aportaron las pruebas idóneas para acreditar la debida afiliación de **Alejandra Coria Carrango, José Roberto García Montero, Ma. del Rosario Martínez Rico, Javier Ramos Cañedo, Luis Miguel González, y MaxYair Flores Azamar.**

Respecto de los formatos de afiliación relativos a Alejandra Coria Carrango y MaxYair Flores Azamar, es importante precisar, que si bien dicho documento fue remitido por una autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, lo cierto es que se trata de una documental privada, toda vez que los datos que lo integran (imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (frente y vuelta) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil) fueron recabados por el propio partido político; los cuales, *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pero, apreciadas en su contexto y concatenadas con el acervo probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de las afiliaciones discutidas, ya que se advierte que éstas fueron el resultado de la manifestación libre y voluntaria de las personas denunciantes, la cual quedó constatada con las firmas autógrafas que se asentaron en la citada aplicación móvil.

Por lo anterior, se considera que *MC* cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que las afiliaciones cuestionadas estuvieron precedidas del consentimiento de las personas denunciantes referidas en el presente apartado, pues se aportó:

1. Para los casos de Alejandra Coria Carrango y MaxYair Flores Azamar, el expediente electrónico ya precisado, en el que aparecen datos como son: el nombre del denunciante, su clave de elector, su sección y domicilio; del mismo modo, aparece una imagen, en anverso y reverso, de la credencial para votar, así como la fotografía viva y firma del ciudadano que brinda su afiliación.
2. Y para los casos de José Roberto García Montero, Ma. del Rosario Martínez Rico, Javier Ramos Cañedo, Luis Miguel González, aportó cédula de afiliación con firma autógrafa y datos personales de los denunciantes.

Ahora bien, con la finalidad de respetar el principio de contradicción y la respectiva garantía de audiencia de las y los quejosos involucrados, durante la sustanciación del procedimiento se ordenó dar vista a los referidos ciudadanos con las respectivas cédulas de afiliación, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

De las constancias de autos se advierte que las personas denunciantes fueron omisas en responder a la vista formulada, mediante la que se les corrió traslado de las constancias de afiliación aportadas por el denunciado, así como la vista de alegatos respectiva, por lo que hicieron nulo su derecho de desvirtuar los medios de prueba exhibidos.

En ese sentido, si los referidos quejosos no controvirtieron la respectiva documental exhibida por *MC*, para acreditar su afiliación, es válido colegir que existe un reconocimiento tácito de haber suscrito y firmado dicho formato, lo que de suyo permite concluir que sí existió su voluntad para ser afiliados al partido denunciado y por tanto, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, por tanto, se le debe dar validez a los referidos formatos de afiliación.

En suma, al engarzar la cadena de indicios a partir de diversos hechos que se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de las afiliaciones; ii) las documentales privadas, consistentes en las cédulas de afiliación de las partes denunciantes, en cuyo contenido aparece la manifestación de su voluntad (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción a ese formato, esta autoridad resolutoria considera que no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de las y los quejosos referidos, haya sido producto de una acción ilegal por parte de *MC*.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer a *MC* sanción alguna.

Ahora bien, más allá de que no se acreditó la infracción denunciada en el presente procedimiento, en el caso, es importante precisar que las personas denunciantes que se analizaron en el presente apartado alcanzaron su pretensión inicial, que consistía en ser dados de baja del registro del padrón de afiliados de *MC*, pues de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la *UTCE* se advierte que los mismos fueron dados de baja del padrón de afiliados del partido denunciado.

2. Apartado relativo a las personas denunciantes que objetaron los formatos aportados por MC

Dentro de este supuesto se encuentran **Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González y Alejandra Jiménez Castillo** respecto de quienes tanto *MC*, como la *DEPPP* informaron que se encontraban afiliados a dicho instituto político y se aportó la cédula de afiliación correspondiente.

Respecto de dichas constancias se dio vista a las personas denunciantes materia del presente procedimiento para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, recibiendo pronunciamientos por parte de dichas personas denunciantes.

En atención a la vista formulada, **Sheila Sthefany Bibiano Molina** manifestó⁸⁸:

*...Le envió este documento, para hacer un llamado de que sin mi consentimiento estoy afiliada al partido **Movimiento Ciudadano**, presenta una cedula con el número (12073067) de fecha 10/Febrero/2012 que desde este momento la desconozco, ya que fue firmada por mi puño y letra, desde este momento solicito se me de de baja del partido y se proceda jurídicamente contra el por falsear información...*

A dicho escrito adjuntó copia de su credencial de elector y de la cédula de afiliación.

Por su parte, **Francisco Hernández González**, manifestó⁸⁹:

... POR MEDIO DEL PRESENTE, ME PERMITO INFORMAR MI INCOFORMIDAD CON EL PARTIDO POLITICO **MOVIMIENTO CIUDADANO EN ACAPULCO GRO.** SE ME

⁸⁸ Visible a fojas 437 a 439 del expediente.

⁸⁹ Visible a fojas 440 y 441 del expediente.

ENCONTRÓ COMO MILITANTE DE ESTE PARTIDO CON MI CREDENCIAL PARA VOTAR, POR LO TANTO ESTA FIRMA QUE ELLOS MUESTRAN EN SU CEDULA DE AFILIACIÓN DE MOVIMIENTO CIUDADANO LA FIRMA QUE SE MUESTRA NO ES RECONOCIDA POR MI PERSONA, YA QUE ESTE REGISTRO FUE HECHO SIN MI CONSENTIMIENTO...

A dicho escrito adjuntó copia de su credencial de elector.

Por otra parte, **Alejandra Jiménez Castillo**, manifestó⁹⁰:

*... Bajo protesta de decir verdad, **QUE COMO ASPIRANTE A CAPACITADOR ELECTORAL ME REGISTRE EN LA PAGINA DE LA CONVOCATORIA EL 19 DE OCTUBRE DE 2020 AHÍ ME PUDE DAR CUENTA QUE ESTABA AFILIADA A DICHO PARTIDO POR LO QUE ACUDI A LAS OFICINAS DEL INE DE MI LOCALIDAD A PRESENTAR UNA DENUNCIA ENCONTRA DEL PARTIDO, EL DIA 10 DE FEBRERO PERSONAL DE INE ACUDE A MI DOMICILIO PARA PRESENTARME LA CEDULA DE AFILIACIÓN QUE LES PROPORCIONO MOVIMIENTO CIUDADANO, EL CUAL DESCONOZCO EN SU TOTALIDAD LA LETRA Y FIRMA NO CORRESPONDEN A MI PERSONA, POR LO QUE PIDO SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS...***

A dicho escrito adjuntó copia de su credencial de elector.

Al respecto, debe precisarse que las manifestaciones realizadas por las personas denunciantes referidas son insuficientes para desvirtuar las pruebas aportadas por el denunciado en razón de lo siguiente:

La *Sala Superior* al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

Por ende, de conformidad con lo sostenido por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

⁹⁰ Visible a fojas 320 y 321 del expediente.

En el caso, como ya se señaló, *MC* aportó los originales de las cédulas de afiliación de las personas denunciantes en comento, esto es, cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que las afiliaciones cuestionadas estuvieron precedidas del consentimiento de las personas quejasas.

Pues como se ha manifestado, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las personas quejasas, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

De ahí que **Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González y Alejandra Jiménez Castillo** debieron aportar, al momento de contestar la vista que se les dio con las documentales ofrecidas por el partido político, un medio de prueba idóneo o suficiente para sustentar su alegación; no obstante, la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio idóneo de prueba, toda vez que la sola manifestación de que no es su firma y aportar copia simple de su credencial de elector, no es suficiente para variar el alcance y valor probatorio del documento ofrecido por el partido político, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento*.

En tal sentido, la idoneidad de un elemento probatorio dependerá del valor de convicción que éste genere para acreditar lo que se pretende. En el caso, esta autoridad no se encuentra en posibilidad de valorar las copias simples que adjuntaron las personas denunciantes, pues éstas generan simples indicios de lo que se pretende acreditar, pues por si solas no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, al tener que ser adminiculadas necesariamente con otros medios de prueba.

Por tanto, se obtiene que, las pruebas idóneas para acreditar la objeción hecha valer por **Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González y Alejandra Jiménez Castillo** en el sentido de desconocer su firma en las cédulas de afiliación presentadas por el partido político *MC*, pudieron ser las periciales en grafoscopía, grafología y caligrafía que debieron realizarse en tiempo, forma y suficiencia a efecto de que dicha cédula perdiera su alcance probatorio, o en su caso, algún otro medio de convicción idóneo a efecto de que esta autoridad electoral estuviera en condiciones de llevar a cabo el desahogo del mismo y, en su caso, los objetantes pudieran probar el hecho que pretendían demostrar.

Situación que en el presente caso no aconteció, pues las personas denunciantes no ofrecieron pruebas idóneas y, por tanto, su dicho es insuficiente para objetar el alcance y valor probatorio del documento ofrecido por el partido político, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento de Quejas*.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **1a./J. 12/2012 (10a.)** de rubro y contenido siguientes:⁹¹

OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). *Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido del documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su justa dimensión.*
[Énfasis añadido]

⁹¹ Consultable en la liga electrónica <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000608>

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,⁹² dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que **la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.***

[Énfasis añadido]

Bajo esta óptica, si las referidas personas denunciantes sostuvieron la falsedad de la firma contenida en la cédula de afiliación que respaldaba su incorporación a las filas del partido político MC, asumieron una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la falsificación de un hecho jurídico, *lato sensu*, (en el caso la firma cuestionada) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En conclusión, si MC cumplió su carga de demostrar que las afiliaciones se realizaron voluntariamente y las personas denunciantes no satisficieron esa carga al no ofrecer medio de prueba idóneo, resulta dable tener por ciertas las firmas cuestionadas y consecuentemente como lícitas las afiliaciones de la que se duelen las quejosas y el quejoso.

⁹² Consultable en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/197531>

Por lo anterior, **esta autoridad electoral considera que no existe una vulneración al derecho de afiliación de Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González y Alejandra Jiménez Castillo.**

Ahora bien, más allá de que no se acreditó la infracción denunciada en el presente procedimiento, en el caso, es importante precisar que las personas denunciadas que se analizaron en el presente apartado alcanzaron su pretensión inicial, que consistía en ser dados de baja del registro del padrón de afiliados de MC, pues de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la DEPPP y del acta circunstanciada levantada por la UTCE se advierte que las mismas fueron dadas de baja del padrón de afiliados del partido denunciado.

Por lo anterior, al no haberse acreditado plenamente la responsabilidad de MC, este órgano colegiado considera pertinente declarar **infundado** el presente procedimiento.

QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la *Constitución*,⁹³ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. No se acredita la infracción al derecho de libre afiliación en perjuicio de Alejandra Coria Carrango, José Roberto García Montero, Ma. del

⁹³ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: **“TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL”**, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª.), Página: 2864, Rubro: **“TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.”**

Rosario Martínez Rico, Javier Ramos Cañedo, Luis Miguel González, y MaxYair Flores Azamar, por parte de **Movimiento Ciudadano** en términos de lo establecido en el Considerando *CUARTO, Apartado1* de esta resolución.

SEGUNDO. No se acredita la infracción al derecho de libre afiliación en perjuicio de Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González y Alejandra Jiménez Castillo en términos de lo establecido en el Considerando *CUARTO, Apartado2* de esta resolución.

TERCERO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

Notifíquese, personalmente a Alejandra Coria Carrango, Sheila Sthefany Bibiano Molina, Francisco Hernández González, José Roberto García Montero, Ma. del Rosario Martínez Rico, Javier Ramos Cañedo, Luis Miguel González, Alejandra Jiménez Castillo y MaxYair Flores Azamar.

Notifíquese a Movimiento Ciudadano por conducto de su representante ante el Consejo General de este Instituto, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y por **estrados** a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/ACC/JD12/MICH/175/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**